

LA PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA: UNA PERSPECTIVA REGIONAL

LAI, Freie Universität Berlin

INTRODUCCIÓN

Dada la magnitud de las coyunturas que abarca la política de la Paz Total y los efectos heterogéneos que su implementación ha generado a nivel local, vemos la necesidad de desagregar el conflicto por regiones para así poder medir con mayor exactitud su progreso y evaluar sus aciertos y fracasos. Este análisis se centra en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe. Con él se busca ampliar la perspectiva sobre los retos actuales en materia seguridad y construcción de paz. La información presentada en este documento se basa en los aportes de representantes de la sociedad civil y expertos en temas de la conflictividad en Colombia, quienes participaron en un evento académico realizado en la FU Berlin en febrero de 2025.

A pesar de las singularidades regionales que muestra el conflicto, se pueden identificar patrones recurrentes en el transcurso de la Paz Total en las tres áreas geográficas analizadas. Las disputas territoriales, por ejemplo, están configuradas por dos o más actores armados que compiten de forma cada vez más violenta por la hegemonía local y que, en ocasiones, se enfrentan también al Estado. El inicio de las negociaciones simultáneas con

múltiples grupos armados entre finales de 2022 e inicios de 2023 provocó una reducción casi que inmediata de la violencia en algunas de las zonas rurales y urbanas más afectadas por el conflicto. Sin embargo, el alivio humanitario y la mejora en las condiciones de seguridad y orden público fueron solo temporales.

Los diferentes ceses al fuego con el gobierno permitieron a algunos actores armados expandir y consolidar su portafolio de actividades ilícitas, mientras que al mismo tiempo hacían crecer sus filas. Esta coyuntura también favoreció la coexistencia o la formación de alianzas temporales entre actores armados, las cuales se transformarían con el tiempo en disputas violentas con las que se pretende sostener y ampliar la propia gobernanza criminal. El caso del Frente 33 del EMC y el Frente de Guerra Nororiental del ELN en el Catatumbo ilustra bien esta dinámica: pasaron de tener una coexistencia relativamente pacífica durante más de dos años a causar una conmoción interna y crisis humanitaria en cuestión de semanas. Cabe señalar, que ambos grupos habían establecido un acuerdo táctico de no agresión en 2022, tras los ataques iniciados a principios de ese

mismo año por el ELN desde el estado venezolano de Apure contra los frentes 28 y 10 de las disidencias de las FARC. Esta ofensiva generó el desplazamiento masivo de la población rural hacia las cabeceras municipales y un número significativo de muertes en Arauca.

El ejemplo anterior demuestra que ni la política de seguridad del gobierno ni las acciones implementadas durante los diálogos de paz han logrado impactar de forma duradera las zonas de alta conflictividad. Por consiguiente, la pretensión de construir una paz territorial como base para avanzar hacia una paz nacional se hace cada vez menos factible. A este respecto, la limitada eficacia de las estrategias implementadas hasta el momento pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la coordinación y comunicación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Una mejor articulación interinstitucional es fundamental para poder responder oportunamente a las transformaciones y demandas de los actores armados.

A continuación se resumen los principales retos para la paz en las regiones analizadas:

- **Región Orinoquía**

Los repuntes recientes de la violencia en Arauca, Vichada, Guaviare y Guainía reflejan cómo diversos actores del conflicto instrumentalizan el deficiente control de la frontera con Venezuela, y el abandono histórico del oriente colombiano en términos de desarrollo territorial e integración socioeconómica. En la zona petrolera de la Orinoquía (Arauca-Casanare-Meta), los registros aéreos recientes de indican un aumento de vuelos furtivos hacia el litoral atlántico hondureño,

diversos puntos de Venezuela y algunas islas del Caribe. El tráfico aéreo de cocaína que parte de las llanuras parece eludir fácilmente el control de las fuerzas de seguridad en Colombia y en los países de destino.

Por otro lado, la misma debilidad fronteriza ha favorecido la expansión de la minería ilegal de oro y coltán en las zonas ricas en minerales (Guainía-Vichada-Guaviare). Esto ha dado lugar a la apertura de trochas y redes viales que se utilizan para trasladar las riquezas que se extraen del suelo, así como a personas, armas, ganado y estupefacientes. Estos activos, lícitos e ilícitos, alimentan redes criminales transnacionales bien estructuradas que han logrado cooptar espacios de alta biodiversidad y los han integrado a los crecientes mercados globales de droga y (agro)commodities. En este contexto, el ELN ha logrado un despliegue y una capacidad militar sin precedentes en la franja fronteriza, lo que le ha otorgado una posición ventajosa frente a otros grupos y en la mesa de negociación. No obstante, su poder en el Pacífico y al interior del país se ha visto notoriamente diezmado. Existen dos sucesos clave que muestran cómo los intentos del gobierno por reducir la violencia y poner fin al conflicto, en lugar de erradicarlo, parecen estar exacerbando sus expresiones, como si se tratara de las cabezas de una hidra. El primero fue la ruptura entre el EMC y el EMBF; el segundo, la del ELN y los Comuneros del Sur. La negociación aislada y paralela del gobierno con estos últimos, seguida de su eventual desmovilización, generó tensiones profundas en los diálogos centrales con el ELN, cuyos portavoces aseguran

el ELN, cuyos portavoces aseguran que la administración Petro intentó desde un principio dividir y desestabilizar la guerrilla desde dentro, al tiempo que trataba de llegar a acuerdos en las mesas. Una acusación similar surgió en el proceso de negociación con el EMC.

En Arauca, la conducta del ELN evidencia la consolidación de un tipo de "*clientelismo armado*", en el que diversos actores económicos y políticos (tanto de derecha como de izquierda) solicitan la intermediación de esta guerrilla para asegurar su estabilidad y poder funcionar en la región. Aunque este concepto requiere mayor estudio y definición, la transacción de servicios entre ciertos grupos de interés y el grupo armado es innegable.

• **Región Amazónica**

En el bioma amazónico, el conflicto está generando graves daños ambientales que comprometen la estabilidad ecosistémica y el bienestar de las comunidades campesinas e indígenas. La escalada de hostilidades entre las facciones disidentes del EMC y el EMBF ha intensificado esta problemática, como se ha podido observar en los departamentos de Caquetá o Putumayo, donde se han deforestado grandes extensiones de bosque y selva para impulsar actividades económicas asociadas a la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la minería ilegal, y el cultivo de hoja de coca y marihuana. Estas economías permiten a los grupos armados mantener su operatividad y consolidar su gobernanza territorial. El EMC, al igual que el EMBF y la Segunda Marquetalia han aumentado la presión sobre la población civil con el fin de ampliar su base social e infiltrar

espacios de deliberación comunitaria, incluyendo Juntas de Acción Comunal y ASOJUNTAS. Esta estrategia ha sido acompañada por la reactivación de guardias campesinas, milicias urbanas, el PC3 y el movimiento bolivariano.

Aunque el comportamiento de algunos actores armados reafirma la clasificación hecha por el gobierno al querer establecer un marco normativo para sus negociaciones, la realidad en terreno presenta muchos más matices. Existen, por ejemplo, signos de una reideologización de algunos frentes del ELN o del EMBF, mientras que ciertos mandos y otras estructuras desestiman el discurso ideológico y han adoptado posturas predominantemente criminales. La velocidad en el reclutamiento y el crecimiento exponencial de los grupos post-FARC, así como los notorios cambios generacionales dentro de sus filas, limitan el tiempo y las oportunidades para el adoctrinamiento. Otros actores armados en esta región muestran un reducido interés político y una creciente conducta criminal, como es el caso de los Comandos de la Frontera, quienes, además de expandir sus bases operativas hacia Ecuador, mantienen vínculos de ilegalidad con megabandas delincuenciales como Los Choneros, operando bajo el nombre de 'los Sinaloa'.

“...en Putumayo, la avalancha y la paz se han sentido traumáticas y nos han demostrado la urgencia de defender la vida pero también de defender los ríos. ¿Por qué decimos que el posacuerdo ha sido traumático, en que sentido traumático? Por un lado, los actores armados se reacomodaron pero por otro, las actividades extractivas crecieron...”
Juliana Rincón (Guardianas del Agua)

La construcción de paz y gobernanza territorial en la amazonía requiere una adaptación específica de los marcos de intervención estatal a la compleja geografía andino-amazónica. En este sentido, es fundamental integrar el valor sociocultural de sus ríos y bosques en el diseño de los modelos de desarrollo regional, así como fortalecer la labor de los grupos de mujeres y demás organizaciones sociales que salvaguardan los bienes comunes frente a las presiones extractivas de multinacionales, actores armados e incluso el propio Estado. En este contexto, es alarmante la corrupción que están generando las grandes sumas de dinero procedentes de la minería ilegal de oro dentro del ejército y la policía.

• **Región Caribe**

En esta región, la Paz Total pasa por dos dilemas conceptuales que hacen que los procesos no solo sean lentos, sino que también los lleven a desaprobaciones y agotamientos. El primero de ellos tiene que ver con la historia y categorización de estos grupos como herederos del paramilitarismo, en el caso de las ACSN y el EGC, lo que hace que no sea el mismo tratamiento, modelo de atención y priorización que se pueda dar en condiciones similares con las disidencias y con el ELN. En efecto, prevalece la discusión sobre el tratamiento político, que ni se define, ni se discute o mucho menos se pone en la agenda. El segundo tiene que ver con el concepto de *paz* que no abarca las expresiones urbanas altamente violentas, que sí están definiendo los conflictos y que sostienen capacidades militares altas. Esto hace que las violencias se concentren en las zonas

Urbanas, y para ellos no se ha planteado ninguna solución, lo que añade muchos condicionantes.

Otro factor determinante en el Caribe son los silencios institucionales prolongados en los temas de paz, que se mantienen incluso en tiempos de crisis. Esta situación se complejiza ante el impacto de la violencia en las ciudades, que ameritan acciones y respuestas estatales que no llegan. Asimismo, la metodología de la paz aún no es clara o estable, y hasta el momento poco vinculante con instituciones locales, organizaciones sociales o la academia. Ello nos remite a discusiones sobre centralismo y la falta de lecturas poco profundas de los territorios. De hecho, la plóitica de Paz Total ha debilitado las organizaciones sociales, indígenas, afros y campesinas locales.

Por otro lado, el Estado debe proveer una ruta urgente para evitar el reclutamiento forzado desde plataformas digitales como FB, IG y Tik Tok. Cada vez son más los niños y jóvenes a los que se contacta a través de estas redes sociales y se incita a entrar en el mundo delictivo. También es importante definir propósitos de paz urbana y establecer mesas de trabajo con la población carcelaria. Desde las cárceles se está sosteniendo una parte importante de los diferentes conflictos y esto no se está priorizando ni teniendo en cuenta. La violencia urbana y el poder carcelario son imprescindibles para hablar de paz y para llegar a acuerdos estables y duraderos. Asimismo, errores técnicos y vacíos normativos en la caracterización legal de los distintos actores armados (*Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley* o *Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto*),

han creado un clima de inseguridad y desconfianza, tanto jurídica como operativa. Esto desincentiva a grupos con voluntad de negociación a que se sumen al proyecto de paz. La detención de alias Araña o la amenaza de extradición a alias HH (Comuneros del Sur), ilustran bien este problema.

• Conclusiones y recomendaciones

Entablar diálogos simultáneos con varios actores armados fue un acierto por parte de la administración Petro, en relación quizás, con la lección histórica de que la desmovilización de un solo grupo, por influyente y grande que este sea, no basta para poner fin al conflicto. Sin embargo, el gobierno careció de un conocimiento detallado y contextualizado de los grupos que sentó a la mesa, así como una comprensión clara de cómo estos determinan las dinámicas territoriales en las regiones donde operan. En este sentido, resulta clave mejorar la conexión entre la academia y la política, con el fin de nutrir los diferentes procesos de negociación con información científica que permita ajustar tanto los diagnósticos iniciales como los marcos de negociación y sus objetivos.

Se debe reconocer que aunque las mesas de diálogo han contado con el apoyo y la participación de expertos de muy alto nivel y competencia, su trabajo se ha visto limitado por barreras organizativas, una gestión deficiente de los encuentros y repetidos errores en los canales de comunicación. Futuras rupturas dentro de los grupos armados pueden conducir a nuevas olas de violencia. Si el objetivo es ejercer presión para debilitar al enemigo e incentivarlo a negociar, la evidencia sugiere que las operaciones militares de alto impacto han sido el método más

efectivo para lograrlo. Para el gobierno resulta crucial cuestionarse cuáles podrían ser los incentivos reales para que un actor subversivo, con un control hegemónico consolidado durante décadas sobre departamentos ricos en recursos y con una proyección de crecimiento binacional (que le otorga libertad de movimiento transfronterizo y una asociatividad atractiva para el régimen del país vecino) contemple su desmovilización y la entrega pacífica de su poder económico y militar.

De igual forma, aunque algunos grupos clasificados como estructuras criminales según la Ley 2272 de 2022 mostraron un alto interés en abandonar las armas, las condiciones ofrecidas no resultaron suficientemente atractivas ni claras. La suma de todos estos factores ha provocado que la Paz Total solo haya logrado, hasta el momento, un impacto limitado y temporal en la contención de la violencia y la conflictividad. En lugar de disminuir, estos fenómenos han incrementado en diversas regiones y ciudades, con el riesgo inminente de desbordarse si el proyecto de paz no prospera.

gefördert durch



Funded by



GIFK

Pagina de web: <https://www.lai.fu-berlin.de/es/forschung/gifk/index.html>

E-mail: grupoberlin.gifk@gmail.com